



Las elecciones presidenciales en Colombia

*Eduardo Posada Carbó**

Tema: El 28 de mayo se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Aunque las encuestas pueden equivocarse (así ocurrió en las elecciones legislativas de marzo), todo parece indicar que el presidente Álvaro Uribe (2002-2006) será reelegido con una cómoda mayoría absoluta –más del 50% de los votos, requisito para evitar la segunda vuelta–. A pesar de la eventual continuidad de la Administración Uribe, es posible que el resultado condicione cambios significativos en el sistema de partidos colombiano.

Resumen: Este artículo examina algunos aspectos del escenario político colombiano frente a las elecciones presidenciales del 28 de mayo. Tras presentar a los distintos candidatos y a los partidos que les apoyan, el análisis se centra en las diferencias entre sus programas, sobre todo en materia de seguridad, aunque también en otras áreas como la economía y las relaciones internacionales, mostrando las diferencias fundamentales entre el Gobierno y la oposición. Se argumenta también que la continuidad de las políticas de seguridad del Gobierno –materia en que las diferencias con la oposición son notables– estaría garantizando la reelección del presidente Uribe, según las encuestas. En la última sección se examina brevemente la evolución de los sondeos de opinión, que sugieren tanto el triunfo del presidente Uribe en la primera vuelta como la derrota del liberalismo en el segundo lugar frente al Polo Democrático Alternativo (PDA), y se adelantan algunas observaciones sobre el posible impacto de dicho resultado en el sistema de partidos.

Análisis: Como es tradicional en la política colombiana, ésta ha sido otra prolongada contienda electoral. El ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus –líder del Partido Visionario (PV)–, inició su campaña a mediados de 2004. Horacio Serpa –candidato del Partido Liberal (PL)– renunció a la embajada en la Organización de Estados Americanos (OEA) a fines de 2004 para lanzarse al ruedo. Esta vez la campaña presidencial tardó en tomar forma, principalmente por dos motivos. Primero, por la incertidumbre frente a la sentencia de la Corte Constitucional sobre la reforma aprobada por el Congreso que permitía la reelección presidencial inmediata, que sólo se conoció en octubre de 2005. Y, segundo, por el proceso de selección de candidatos de los principales partidos de la oposición –PL y PDA–, sujeto a elecciones primarias celebradas en marzo de este año, a tiempo con las elecciones legislativas.

* *Research Associate del Centro de Estudios Latinoamericanos del St. Antony's College, Oxford*

Los candidatos y partidos en disputa

Cinco candidatos se enfrentarán en las urnas al presidente Uribe (un sexto, Álvaro Leyva, retiró su nombre recientemente), aunque sólo cuatro (el presidente Uribe incluido) han concentrado la atención pública:

- El presidente Álvaro Uribe –disidente del PL–, apoyado por una coalición multipartidaria en la que se destacan dos partidos de formación reciente alrededor de sus políticas –Cambio Radical (CR) y Partido de la Unidad Nacional (PU)–, y el tradicional Partido Conservador (PC), que en dos elecciones consecutivas ha decidido no llevar candidato propio. La campaña del presidente Uribe se desarrolla a través de la organización Primero Colombia, bajo cuyo nombre se registró como candidato en 2002.
- El ex ministro y ex embajador Horacio Serpa –del PL, hasta hace poco el partido históricamente mayoritario en Colombia–, quien repite por tercera vez en sus aspiraciones presidenciales.
- El senador y ex presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, del PDA –el nuevo partido surgido de una amplia coalición de fuerzas de izquierda–.
- El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, registrado ante las autoridades electorales como candidato de la Alianza Social Indígena, aunque apoyado en su propia organización política, el PV.
- Los otros dos candidatos, de casi nulos registros en las encuestas de opinión, son el ex ministro de Justicia Enrique Parejo y el médico Carlos Rincón.

Este escenario electoral –dominado por la coalición de gobierno y dos partidos importante de oposición, el PL y el PDA– refleja un proceso de recomposición del sistema de partidos colombiano, condicionado por nuevas instituciones electorales y por la figura del presidente Uribe. Aunque a ratos Antanas Mockus parecía proyectarse como un candidato en tercería –distanciado del Gobierno pero prometiendo la continuidad de algunas políticas–, la campaña tendió a polarizarse entre simpatizantes y enemigos de Uribe. No se trata de una mera lucha entre personalidades. Las plataformas del Gobierno y de la oposición ofrecen visiones diferenciadas sobre cómo resolver los graves problemas de la sociedad colombiana.

Las propuestas del Gobierno y la oposición

A primera vista, las elecciones colombianas parecerían ser apenas un plebiscito sobre el liderazgo del presidente Uribe. La posibilidad de la reelección consecutiva le otorga dicha característica. Uribe ha logrado mantener altísimos grados de popularidad a lo largo de los cuatro años de su mandato –hoy superiores al 70%–. Es indudable que su liderazgo les ha devuelto confianza a los colombianos. En un balance de los primeros cien días de su Administración, la revista *Semana* destacó las características individuales que habrían asegurado la continuidad de esos altísimos índices a favor del presidente: su estilo austero, su ética del trabajo y sus manifestaciones de compromiso con la comunidad. Habría que añadir el sentido de autoridad que Uribe le ha conferido a la jefatura del Estado. Sería errado, sin embargo, reducir el significado de estas elecciones a un simple dilema de liderazgos personales. Tal interpretación pasaría por alto las diversas opciones programáticas en juego, en áreas tan fundamentales como el manejo de la economía, las relaciones internacionales y, por encima de todo, la seguridad.

La seguridad

La seguridad fue el tema que definió el triunfo de Uribe en las elecciones de 2002, y volverá quizá a ser su carta ganadora en esta campaña. Algunas cifras son contundentes. La más ilustrativa es tal vez la caída marcada de la tasa de homicidios, en descenso continuo desde 2002. Algo similar ocurre con la tasa de secuestros, que también ha descendido en proporciones drásticas. No toda la reducción del homicidio puede atribuirse a sus políticas –la caída del homicidio en Bogotá (hoy más baja que en

otras capitales de Latinoamérica, y un factor importante en la explicación de las causas del descenso nacional) antecede a su presidencia—. Los procesos de modernización de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del sector judicial —que se han beneficiado del Plan Colombia (programa iniciado durante la Administración Pastrana —1998-2002—, con un componente importante de ayuda militar estadounidense)— también son anteriores a su Gobierno. No obstante, su Administración logró revertir una nueva espiral ascendente de homicidios, que tras un pico en 2002 cayeron más del 20% al terminar el primer año de su mandato y, aunque en los siguientes años fue menos brusco, el descenso continuó: Colombia cuenta hoy con la tasa más baja de homicidio experimentada por el país en las últimas dos décadas.

Los esfuerzos por restablecer el control en el territorio nacional han contribuido a mayores niveles de seguridad. Hoy hay presencia de la policía en todos los municipios del país —unos 170 de los 1.100 municipios colombianos no tenían presencia policial hace cuatro años—. El Gobierno está lejos de derrotar definitivamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero durante estos cuatro años ha ganado la iniciativa contra dichos grupos guerrilleros, mientras ha mermado su capacidad ofensiva. El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, los grupos armados ilegales, enemigos de la guerrilla y conocidos como paramilitares) está lleno de riesgos, dudas y preocupaciones, mas se espera que su desmantelamiento abra el camino para ponerle fin al conflicto armado. Este no es el lugar para un balance sistemático de la política de seguridad democrática del Gobierno Uribe. Podrían anotársele fallos, imperfecciones y vacíos. Por el momento, importa reconocer los significativos avances en esta materia fundamental, con el fin de entender las principales razones del extraordinario apoyo que sigue recibiendo su gestión.

De acuerdo con los estudios de Gallup —encargados por un grupo de medios de comunicación, incluida la cadena Caracol—, un 64,5% de los encuestados en mayo de 2006 considera que el país es más seguro que hace un año. Casi el 80% apoya las negociaciones con los grupos paramilitares. Más del 66% está de acuerdo con que su Gobierno “es respetuoso de los derechos humanos” (un 25% no lo cree así). Entre todos los candidatos, Uribe es percibido como el más preparado para enfrentarse a los diversos problemas de seguridad por una amplia mayoría: combatir la delincuencia común (67,3%), la guerrilla (71,4%), los paramilitares (66,5%) y el narcotráfico (67%). El problema de seguridad sigue siendo tan severo, y prioritario, que la mayoría de los encuestados estarían dispuestos a “perder algunas libertades para tratar de mejorar la seguridad”. Al mismo tiempo, la confianza general que infunde el presidente es quizá la razón por la cual la mayoría de los encuestados considera que los principales problemas que deberán ser resueltos por el próximo mandatario colombiano no están en el área de seguridad, sino en el terreno económico-social.

Mientras el presidente Uribe promete la continuidad de unas políticas que son generalmente percibidas como exitosas, los candidatos de la oposición han mantenido un discurso crítico de los resultados de la política de “seguridad democrática”, mientras ofrecen otras soluciones, basadas en diagnósticos fundamentalmente distintos del problema. Tanto para Serpa (PL) como para Gaviria (PDA) la seguridad parecería un asunto secundario, derivado de los problemas de inequidad e injusticia social en Colombia. Las palabras “homicidio” o “secuestro” están ausentes del programa presidencial del PDA, *Construyamos democracia, no más desigualdad*. La expresión seguridad tampoco aparece en dicho documento, excepto para referirse a la “seguridad social integral”, o a la “seguridad soberana” en alusión crítica a la ayuda militar de EEUU. Ambos candidatos subvaloran los avances de seguridad como “falsos”. Según Gaviria, el presidente Uribe ha construido un “mundo virtual” para los colombianos, un espejismo mediático que ocultaría la falta real de seguridad y el deterioro de los derechos humanos.

En los inicios de su campaña, el ex alcalde Mockus reconoció –a diferencia de Serpa y Gaviria– algunos avances de la política de seguridad, cuando prometió que había que “construir sobre lo construido”, pero con mayor énfasis en programas de pedagogía ciudadana. En fechas recientes, Mockus ha radicalizado sus críticas al Gobierno, particularmente por sus negociaciones con las AUC. Según Mockus, los avances de seguridad se encuentran empantanados, serían conquistas “de corto vuelo”, cuyas limitaciones auguran “más violencia para el futuro”.

El conflicto armado y la búsqueda de la paz

A diferencia del Gobierno, los candidatos del PL y del PDA creen que el conflicto armado es un reflejo de conflictos sociales. Frente a los grupos guerrilleros, coinciden en enfatizar sus preferencias por la “negociación política” con tales grupos, mientras acusan al Gobierno de enfocar la solución a través de la vía exclusivamente militar. El programa de Serpa, más elaborado en este punto que el de Gaviria, se cuida de decir que “el diálogo no será, para las organizaciones armadas ilegales, medio táctico para fortalecerse”, y advierte qué habría temas que quedarían excluidos de la mesa negociadora –como los derechos de propiedad o los fundamentos de la democracia–. Gaviria ha expresado que profesa “una filosofía política incompatible con el uso de las armas”. Su programa, sin embargo, es vago respecto de qué negociaría con la guerrilla. En entrevistas a la prensa, no ha excluido la posibilidad de despejar militarmente territorio para el diálogo, y ha aceptado que si reconocerle “beligerancia” a las FARC “agiliza una solución del conflicto no tendría inconveniente en hacerlo”. Sus críticos, como Mauricio Vargas –director de la revista *Cambio*–, consideran que su discurso frente a las guerrillas es “ingenuo y tolerante”. Otros, más severos –como el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza–, le reclaman la compañía de “la izquierda más hirsuta y extremista que no ha querido romper del todo con la violencia terrorista y mafiosa de las FARC”. Gaviria ha insistido que “en el PDA rechazamos la lucha armada”, y que “si hay gente en el Polo que cree que la lucha armada es la vía, se equivocaron en señalarme como candidato”.

A pesar de los esfuerzos de los candidatos del PL y PDA de aparecer como los portadores de la solución política del conflicto armado, los informes de Gallup sugieren que una mayoría (51%) percibe a Uribe como el más capacitado para “trabajar para lograr una paz negociada”. El presidente no se ha cerrado al diálogo con la guerrilla –en los últimos meses el Gobierno ha sostenido conversaciones con el ELN en Cuba–. A mediados de mayo, el presidente Uribe fue más allá al decir que estaría dispuesto a una zona despejada “más extensa que la que se había definido con los países europeos para el acuerdo humanitario” con las FARC, siempre y cuando éstas aceptaran “un cese de hostilidades”. Alfredo Rangel –director de la Fundación Seguridad y Democracia– ha dicho que está “casi seguro de que en el segundo mandato de Uribe habrá conversaciones de paz con las FARC”. Entre los cuatro candidatos, el más duro sobre cómo negociar o no con los grupos armados ilegales quizá sea Antanas Mockus –cuyo programa gira alrededor de la premisa del respeto a la legalidad–. Pero su mensaje contra la “cultura del atajo”, a ratos confuso, no ha calado lo suficiente en una opinión pública que ahora vuelve a dar muestras de preferir la vía negociada para superar el conflicto armado.

Las políticas económicas y sociales

No hay espacio para examinar con igual atención otras políticas. Un breve repaso muestra que en casi todas las materias sobresalen diferencias significativas entre los programas del Gobierno y las propuestas del PL y PDA, mientras Mockus mantiene en algunos aspectos afinidades con el Gobierno. Tanto el PL como el PDA insisten en criticar el modelo de desarrollo económico del presidente Uribe. El PDA es particularmente intervencionista: Gaviria propone “la recuperación para el Estado de la dirección de la economía”. Su programa de gobierno apuesta más al mercado interno que al crecimiento exportador, y a la protección de la producción nacional. Propone

renegociar la deuda, revisar la autonomía del Banco Central (cuyas medidas han sido a veces criticadas por el Gobierno) y recuperar “la soberanía sobre el control de cambios”. Bajo el subtítulo “recuperación del patrimonio público”, el PDA propone “defender la gestión y administración pública sobre los servicios públicos esenciales del Estado y las áreas económicas y sociales estratégicas”. La oposición también le critica al Gobierno sus faltas en política social.

Los resultados de la gestión económica de Uribe son, no obstante, positivos. Como observó Daniel Castellanos, en un balance para *El Espectador*, “la economía logró salir de la recesión de 1999, y el año pasado creció 5,1%, la mejor cifra de los 10 últimos años, gracias, sobre todo, a un repunte impresionante de la inversión”. La inflación continúa baja, al 4,12%. Hay aún problemas con el déficit del Gobierno central, pero “la tendencia de la deuda pública dejó de ser explosiva”. La tasa de desempleo ha disminuido, aunque se mantiene relativamente alta. Los indicadores sociales son menos positivos, pero también se observan adelantos, como en las áreas de educación y salud. La pobreza, que sigue siendo un grave problema, ha disminuido –lo que se discute es cuánto–. En su balance para *El Espectador*, Alejandro Gaviria concluyó que “los resultados sociales son aceptables, pero más por cuenta de la buena economía que de la acertada política social”. De cualquier manera, en estas áreas las propuestas de la oposición tampoco hacen mucha mella al Gobierno. Aunque en asuntos sociales la opinión favorable no es tan alta como en seguridad, los estudios de Gallup sugieren que la gran mayoría considera al presidente Uribe el candidato más capacitado para resolver los problemas de desempleo, educación, salud, servicios públicos y pobreza.

Las relaciones internacionales

También en éste área hay diferencias notables. Tanto el PL como el PDA proponen una política multilateral que propicie menos cercanías a EEUU. Serpa sugiere un nuevo “diálogo” con EEUU, “respetuoso de nuestra soberanía que recupere los pilares fundamentales de la estrategia mundial contra las drogas ilícitas”, pactada en la ONU. Gaviria se opone a la política de extradición –en los primeros dos años de su Gobierno el presidente Uribe ordenó la extradición de más de 170 personas solicitadas para ser juzgadas por narcotráfico y otros delitos en diferentes países–. Tanto Serpa como Gaviria se oponen al Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Gobierno negoció con EEUU –Mockus lo apoya–. Gaviria sometería al TLC a una consulta popular y ha sugerido revisar el Plan Colombia, mientras el presidente propone negociar un Plan Colombia fase II. Ninguno de los programas de la oposición menciona explícitamente a Venezuela, el país fronterizo con el que Colombia ha mantenido relaciones tensas. Venezuela tampoco aparece expresamente entre los “diez retos” de política exterior planteados por el presidente Uribe para 2006-2010. El programa del PDA, sin embargo, propone apoyar “el proceso de integración alternativa de las Américas vinculado a la Comunidad Suramericana de Naciones y el proceso de cambio que se viene gestando en diferentes países de la región”. Gaviria, no obstante, ha criticado la injerencia del presidente Chávez en las elecciones de otros países como Perú. Otros dirigentes del PDA simpatizan más con el presidente venezolano.

Elecciones con opción

El electorado colombiano tiene ante sí un menú diverso para escoger el 28 de mayo. Además de las diferencias anotadas, hay otras significativas en materias como la “despenalización de la dosis personal de droga” –favorecida por Gaviria, criticada por Uribe–, o la ley de flexibilidad laboral –favorecida por Uribe y criticada por Gaviria–. Detrás de la decisión de renovar o no el mandato al presidente Uribe, se encuentran visiones alternativas de cómo gestionar el país. Un gráfico de *votebien.com* –el portal de análisis electoral elaborado por la revista *Semana*, Transparencia por Colombia, FESCOL y Terra– ubica a los candidatos en el espectro político: Gaviria, izquierda; Serpa, centro-izquierda; Mockus, centro; Uribe, derecha. Quizá estas etiquetas no representen

fielmente a todos los candidatos, pero el cuadro sugiere que éstas son unas elecciones con opción.

Una campaña atípica

A pesar de las diferencias programáticas, los analistas políticos colombianos han criticado la ausencia de debate en la campaña presidencial. En parte, ello se debe a las extraordinariamente altas tasas de aceptación del presidente Uribe en las encuestas, que han anticipado su holgado triunfo electoral y motivado cierto desinterés entre los mismos analistas. En parte porque el presidente decidió no debatir personalmente sus propuestas con ningún candidato, además de negarse a conceder entrevistas a la prensa escrita. Desde que anunció su candidatura a la reelección consecutiva –un hecho sin precedentes en la historia colombiana–, Uribe anunció una “campaña atípica”, en la cual sería “más garante que candidato”, ya que Colombia demanda “del presidente más Gobierno que campaña”. La campaña no ha dejado de contener incertidumbres sobre sus resultados, en particular, sobre la suerte de los dos más importantes contendientes de la oposición, y por su eventual impacto en el sistema de partidos en Colombia.

Las principales firmas encuestadoras que han seguido la campaña electoral han dado, por lo general, la victoria al presidente Uribe en la primera vuelta, aunque con algunas diferencias y excepciones. La intención de voto por el presidente se ha mantenido consistentemente en el 56%, según las encuestas encargadas por las revista *Semana* y la cadena RCN a Napoleón Franco. El “opinómetro” de *El Tiempo* sugiere mayor volatilidad: en enero la intención de voto por el presidente bajó al 48%, subió al 65,2% en febrero y volvió a bajar al 53,9% en marzo, pero subió otra vez al 58,9% en el último sondeo. Las encuestas de Gallup también sugieren cambios, pero siempre han dado un cómodo triunfo a Uribe. No obstante, de la abrumadora mayoría registrada por Gallup en diciembre de 2005 (70,9%), la intención de voto por el presidente descendió al 58,2% en abril –quizá por la forma como el Gobierno manejó los escándalos suscitados por las acusaciones de un ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)–. Pero en las últimas encuestas de mayo, la intención de voto por Uribe había subido al 61,2%. Los cambios más visibles, similares en todas las encuestas, se han producido en las campañas de Serpa (PL) y Gaviria (PDA). En los sondeos de Gallup, el ascenso de Gaviria es constante: 2,2% en diciembre de 2005, 10,3% en marzo de 2006, 14,9% en abril y 20,4% en mayo, cuando pasó al segundo lugar. Serpa, por el contrario, ha bajado desde marzo, cuando tenía un 20,4% de la intención de voto. Desde entonces descendió al 18,7% en abril y al 13,7% en mayo, cuando pasó a ser tercero. Mockus alcanzó un pico del 5,7% en diciembre de 2005, pero descendió y, pese a una leve recuperación en abril, en la última encuesta no llega al 1%. Desde mayo, *El Tiempo* también le da el segundo lugar al candidato del PDA.

Por supuesto que la oposición cuestiona con insistencia la credibilidad de las encuestas. Para el ex presidente y dirigente del PL, Alfonso López Michelsen, las elecciones siguen siendo “una gran incógnita”. Sin embargo, de ser acertadas las predicciones, no sólo el presidente Uribe triunfaría en primera vuelta sino que el PDA derrotaría al liberalismo, un hecho político de enorme significado. La eventualidad de lo que la revista *Cambio* llamara la “debacle liberal” ha anticipado un debate sobre el futuro del PL y del sistema de partidos colombiano, en recomposición desde hace algún tiempo.

Los resultados del 28 de mayo tendrían que verse conjuntamente con los de las elecciones legislativas del pasado marzo, donde el liberalismo, aunque disminuido, mantuvo su condición de principal partido de la oposición. Una derrota estruendosa de Serpa podría motivar la deserción de muchos parlamentarios liberales hacia los recién formados partidos uribistas. Algunos han sugerido la reunificación del Partido alrededor del presidente quien, si bien en disidencia frente a los dirigentes liberales, nunca ha renunciado a su condición liberal y mantiene un discurso de apelación a las bases del

partido. Este último escenario es quizá remoto, aunque no imposible. Es difícil concebir la reunificación del PL alrededor de Uribe después de la dura oposición del liderazgo del partido: el jefe único del PL, el ex presidente César Gaviria, ha descartado esa posibilidad. Pese a las incógnitas, todo parece indicar que el sistema político de Colombia se mueve con mayor claridad hacia un multipartidismo limitado, donde unos cinco partidos políticos tendrán el mayor protagonismo, agrupados en dos grandes coaliciones alrededor del Gobierno –Cambio Radical, el Partido de Unidad Nacional y el Partido Conservador–, y en la oposición el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo. Los resultados del 28 de mayo, y el papel que decida jugar el presidente Uribe, determinarán el curso definitivo de este proceso.

Conclusiones: Frente a opciones de gobierno diferenciadas, el electorado colombiano parece inclinarse por la continuidad de las políticas del presidente Uribe, a quien las encuestas dan como ganador en primera vuelta en las elecciones del 28 de mayo. Aunque este triunfo ha sido predecible, la posible conquista del segundo lugar por el candidato del PDA es un hecho sorpresivo, que consolidaría la posición de este nuevo partido en el sistema partidista colombiano, en proceso de transformación.

Eduardo Posada Carbó
Research Associate del Centro de Estudios Latinoamericanos del St. Antony's College,
Oxford